

SORTU: ¿EL FIN DE ETA?

La opinión pública en la lucha contra el terrorismo

FRANCISCO J. LLERA RAMO

Desde que ETA asesinara a la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola, como consecuencia de la bomba incendiaria que hizo estallar en la estación donostiarra de Amara el día 27 de junio de 1960 sin que se haya hecho responsable de este vil asesinato ni hayan sido identificados los autores del mismo, ha transcurrido medio siglo de historia. Desde esa fecha y hasta hoy han pasado, en efecto, cincuenta años en los que ETA es la gran protagonista, aunque no en solitario, del terrorismo en España. Además, el terrorismo de ETA es el único que ha logrado conectar con e impactar, significativamente, en la opinión pública y ha creado un amplio movimiento social de apoyo en el seno de la sociedad vasca.

De esos cincuenta años, algo más de quince transcurren bajo la Dictadura y los 35 restantes en pleno régimen democrático. Pero, si en la primera etapa se producen alrededor del 6% de los asesinatos de ETA, incluido el del Presidente del Gobierno (Almirante Carrero Blanco) en 1973, es en la transición a la democracia y los años de su despliegue institucional (incluido el del autogobierno vasco) y consolidación del pluralismo, cuando mayor es la actividad terrorista. ETA, por tanto, se ha convertido en la organización terrorista en activo más veterana del continente europeo, después del IRA, y España, junto al Reino Unido, el país que más largamente ha tenido que padecer y reaccionar contra una acción terrorista larga y sostenida en el tiempo.

No es casual que ambos terrorismos tengan un sustrato ideológico identitario y comunitarista, más allá del ropaje marxista e izquierdista del que se hayan po-

dido ir revistiendo con el tiempo, básicamente, con el fin de ampliar su base de apoyo interno o para establecer alianzas estratégicas y logísticas internacionales. Partiendo, por tanto, de principios nacionalistas, compartidos con otros actores políticos con los que compiten por el control de su hegemonía ideológica en la construcción de su comunidad étnica, basan su acción estratégica en el enfrentamiento entre comunidades/identidades, en la limpieza étnico-ideológica y en la lucha contra el Estado “opresor”, al que le disputan el monopolio del uso de la violencia legítima. Para ello, necesitan articular en el seno de su comunidad una legitimidad alternativa a la del Estado, que les sitúe en el imaginario colectivo de los *suyos* como auténticos héroes y vanguardia, a la vez vengadora y salvadora, de la victimización de su comunidad por la violencia, que ellos consideran *ilegítima*, del Estado. Esto es lo que les permite justificar su *guerra de liberación* del Pueblo Vasco frente a ese Estado.

1. ¿Será Sortu el punto final?

ETA hace más de 18 meses que no asesina en España y su última actuación son las bombas en establecimientos hoteleros de Mallorca del 9 de agosto de 2009. En el último año 2010 solo ha perpetrado un par de asaltos a empresas en suelo francés y el asesinato del gendarme Jean-Serge Nerin el 16 de marzo en uno de esos asaltos. Por lo demás, hay constancia policial de intentos de atentar (incluidos sus fracasadas fábricas de explosivos en Cataluña y Portugal) hasta enero de 2010. Al mismo tiempo, también decae significativamente la actividad violenta de su entorno en el País Vasco con 74 acciones de *kale borroka*,

lo que supone un 43% menos que el año anterior o un 83% menos que el año 2007 tras el final de la última tregua. Hace un año ETA decide un parón técnico (o forzoso), agobiada por el acoso policial y por la presión de los debates abiertos en sus bases desde finales de 2009, dedicándose a tareas de reestructuración interna y a la discusión sobre su propia estrategia. Es muy significativo que desde septiembre de 2007 no publica su boletín interno *Zutabe*, haciendo públicos seis comunicados y una entrevista en *Gara* (26 de septiembre) en el último año. Sin embargo, ETA resiste la presión de Batasuna y en noviembre adopta una resolución en la que considera incuestionable la continuidad de la estrategia político militar, demostrando no estar dispuesta a someterse a la estrategia de su rama sociopolítica. El último comunicado del 8 de enero de 2011 es resultado de esa resolución, en el que declara un “alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada”, recibido con regocijo teatral por los dirigentes de la izquierda abertzale ilegalizada, aún a sabiendas de lo que esconde, y que utilizan como el pistoletazo de salida “autorizado” para sus planes de intentar volver a la legalidad con una nueva marca política. Por todo ello, esta tregua tiene mucho de *farol* y destinada al consumo interno de sus propias bases, cuyo control se resiste a perder.

De ahí que el protagonismo no esté en este momento en el componente militar del entramado terrorista, sino en su movimiento socio-político, claramente afectado por el rechazo social a la violen-

cia, por el acoso judicial y policial a sus estructuras orgánicas y por la unidad de las fuerzas democráticas a la hora de mantener las exigencias para su vuelta a la legalidad, amén de la fatiga que ha mostrado el hecho de perder más de la mitad de sus apoyos electorales en los últimos años, en buena medida a favor de Aralar, su escisión y competidor directo. Los límites de la estrategia de Lizarra y el inicio de las políticas antiterroristas de tolerancia cero comienzan a hacer mella en una base social, cada vez más erosionada y sin salida. Sin embargo, es el fracaso de la tregua y el proceso negociador de 2006 el que hunde definitivamente sus expectativas, al interiorizar una parte importante de sus apoyos la responsabilidad de ETA en tal fracaso, al tiempo que los tribunales sancionan su ilegalización precisamente por su pertenencia estructural al conglomerado terrorista y su dependencia orgánica y estratégica de ETA. Así es como una parte de su entramado político, huérfano y desorganizado, comienza a buscar salidas y a cuestionarse la disfuncionalidad de la continuidad de la violencia para sus intereses.

La clave estaba en qué hacer con ETA, porque parece que sin ella no podían tener un recorrido autónomo, pero, por otro lado, no eran capaces de dilapidar el capital político acumulado por los terroristas y su liderazgo orgánico. Los Otegi, Diez Usabiaga, Etxebeste y Etxeberria comienzan a diseñar la hoja de ruta del “polo soberanista” a partir del verano de 2008, con lo que inician el proceso de desenganche y de tira y afloja con ETA, recurriendo a la ayuda del Sinn Fein irlandés y del abogado sudafricano Brian Currin. El 14 de noviembre de 2009 presentan en Alsasua su documento *Zutik Euskal Herria* o la Tierra Vasca en pie, basado en el principio de que “el proceso democrático debe desarrollarse en ausencia total de violencia y sin injerencias” y que comenzará a debatirse entre sus bases en una suerte de pulso interno a ETA. A lo que parece, el debate se cierra en febrero de 2010 con un respaldo muy mayoritario a la propuesta política frente a la intransigencia de ETA-EKIN, a la que se exige su sometimiento a la estrategia de la

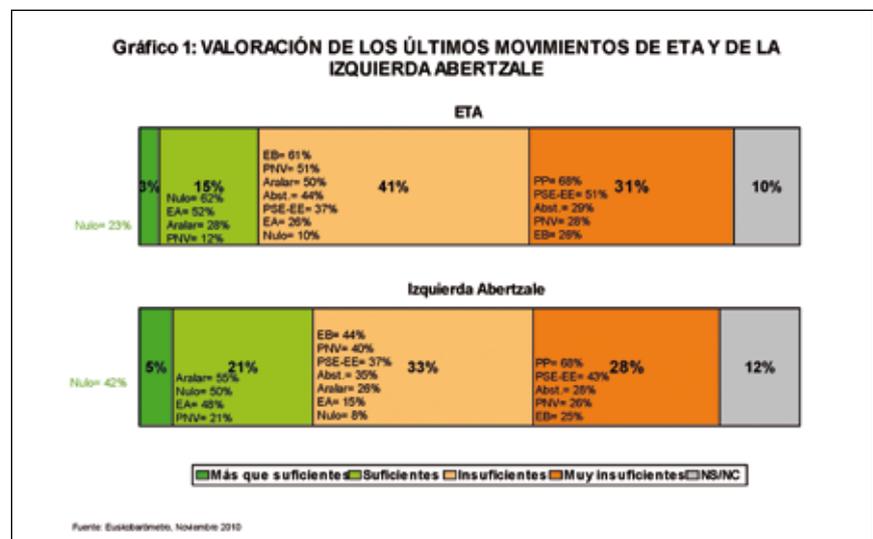
nueva mayoría. Sin embargo, con el fin de evitar la ruptura interna y recuperar el crédito perdido en la sociedad vasca, deciden hacerlo de una forma gradual e irreversible. Así es como, de forma combinada, Brian Currin con la Fundación Nelson Mandela y cuatro premios Nobel (Frederick de Clerk, Desmond Tutú, John Hume y Mary Robinson) hacen pública el 29 de marzo de 2010 la llamada *Declaración de Bruselas* en la que se emplaza a ETA un “alto el fuego unilateral, permanente y verificable”.

Como hemos visto, ETA sigue reafirmando en sus posiciones en los meses siguientes, por lo que ahora es la izquierda abertzale ilegalizada la que comienza con sus emplazamientos sucesivos, de acuerdo con una estrategia calculada, que combina estas exigencias a ETA con la movilización en favor de los presos y la presión social, mediática e internacional sobre el gobierno y los partidos democráticos. El objetivo táctico es, sin duda, la legalización y el poder estar presentes en las elecciones, mientras que el fin de la violencia es algo puramente instrumental y combinado con el objetivo estratégico de un diálogo político en el que ellos esperan ser protagonistas indiscutibles y que permita acercarse a la meta independentista compartida con ETA mediante la territorialidad y la autodeterminación.

Entre tanto, la sociedad vasca ha asistido distraída y escéptica a esta especie de *vodevil abertzale* en el que hay de casi todo (drama humano, comedia, estriptis, suspense y mucho enredo), fiándose muy poco de unos y de otros.

Según nuestros datos de noviembre y como muestra el gráfico 1, una mayoría de la opinión pública vasca consideraba insuficientes todos estos movimientos de la izquierda abertzale ilegalizada y, sobre todo, de ETA, casi sin distinción de electorados democráticos, aunque con intensidades diversas. Tan solo el electorado de la propia izquierda abertzale legalizada y en menor medida, los de sus socios del llamado “polo soberanista” (EA y Aralar) los valoran como suficientes de forma mayoritaria. Además, una mayoría de casi seis de cada diez vascos piensa que el mantenimiento de la violencia por parte de ETA está perjudicando los intereses políticos de la izquierda abertzale ilegalizada, frente a poco más de uno de cada diez que opina lo contrario. La propia sociología de la izquierda abertzale ilegalizada se muestra dividida entre el acuerdo o el desacuerdo con el diagnóstico mayoritario de la sociedad vasca, lo que explica las dificultades que sus dirigentes están teniendo para desvincularse, si no enfrentarse, a ETA.

Después de la última declaración de tregua unilateral por parte de ETA se han producido distintas reacciones y propuestas. Por un lado, ETA y las organizaciones de la izquierda abertzale que le apoyan plantean un proceso de diálogo con condiciones políticas y penitenciarias, mientras que, por otro lado, el Gobierno y la mayoría de las fuerzas democráticas rechazan cualquier posibilidad de diálogo sin un abandono efectivo de las armas y cualquier forma

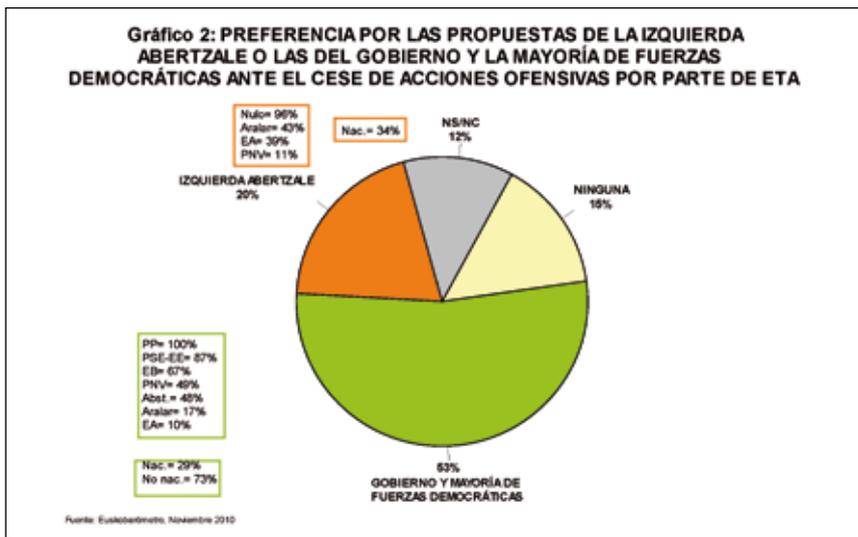


de violencia o intimidación. Al pedirle a la opinión pública que elija entre ambas posiciones, la mayoría de la sociedad vasca, como muestra el gráfico 2, se decanta por apoyar las posiciones de firmeza y prudencia del Gobierno y las fuerzas democráticas, antes que las propuestas de la izquierda abertzale ilegalizada, destacando la contundencia con la que la opinión pública autonomista apoya a los primeros frente a la división de los nacionalistas entre unos y otros.

pasado del que son responsables y pasando de puntillas por la espinosa e inevitable cuestión de sus miles de víctimas. Los principios estratégicos, políticos y orgánicos son presentados por históricos de HB como Rufi Etxebarria y el abogado Iñigo Iruin el día 6 de febrero de 2001 en el palacio Euskalduna de Bilbao en un acto organizado por *Lokarri*, pero los promotores/pantalla del nuevo partido son presentados como supuestos ciudadanos anónimos sin vínculos pasados

tes? ¿se quiere, realmente, romper y acabar con ETA o tratan de instrumentalizar su espectro? Pero, frente a tantos interrogantes, están las certezas clamorosas de un pasado que no parecen dispuestos a afrontar y del que es exigible que respondan.

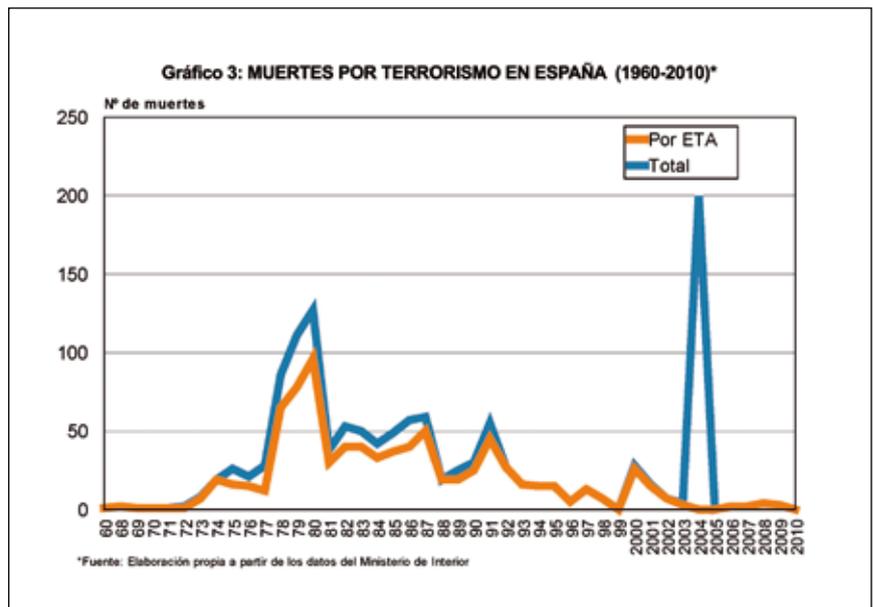
El nudo gordiano de las sentencias de ilegalización es su pertenencia orgánica y estratégica al entramado terrorista en el que ETA es quien manda, por lo que la condena o no de sus acciones violentas, puede ser consustancial o circunstancial, según se mire. La cuestión, por tanto, no es si es una nueva marca con una nueva estructura con apariencia convencional e independiente, con nuevas caras no quemadas o que reniegue de la violencia futura de la propia ETA. La cuestión es que su pasado sigue lastrando su presente en tanto en cuanto no se cuestione o se rompa con él o con quien orgánicamente lo mantiene presente, que es ETA y su estrategia político-militar. Habrá que esperar, pues, a lo que digan los tribunales, por un lado, y a que Sortu pruebe con acciones fehacientes lo que hasta aquí solo son buenas palabras, por otro. Pero lo que está claro es que este nuevo paso nos acerca aún más al final del terrorismo y no precisamente porque les hayamos estimulado a darlo con concesiones o promesas, sino por el contrario porque la política de firmeza y unidad democrática no les ha dejado otra salida. Digan lo que digan los tribunales, queda un largo camino para que Sortu deje de



Finalmente, de acuerdo con su hoja de ruta y vista la debilidad orgánica y operativa de ETA, la izquierda abertzale ilegalizada decide seguir con sus planes y entre el 7 y el 9 de febrero de 2011 escenifica, con su liturgia mediática habitual, la presentación y registro de su nueva marca político-electoral (Sortu o “nacer” en lengua vasca), que proclama que no tiene vinculación alguna con ninguna organización anterior (se supone que la izquierda abertzale ilegalizada) y es independiente de cualquier otro vínculo orgánico (se supone que ETA y su entramado), se organiza como un partido convencional con afiliación individual (ya no es un movimiento abierto y asambleario), apuesta por las vías exclusivamente democráticas y políticas para su acción y, finalmente, “rechaza y se opone al uso de la violencia, o la amenaza de su utilización, ...incluyendo, la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones” (se supone que se desmarca de lo que pueda hacer ETA), evitando decir una sola palabra referida al dramático

con las organizaciones de la izquierda abertzale ilegalizada.

Llegados hasta aquí, son más las preguntas que las respuestas: ¿para qué inventar lo ya inventado? ¿no está ahí Aralar con el camino abierto? ¿por qué EA y no Aralar como socios preferen-



ser parte del entramado, de la sociología y de la estrategia política de ETA; y eso solo depende de ellos salvo que nuestras instituciones democráticas les hagan el favor y se adelanten a inmovilizar esa máquina del terror. Tantos interrogantes obligan a esperar con paciencia, manteniendo la hoja de ruta institucional que tan buenos resultados ha cosechado.

2. Las cifras del terrorismo en España

Vamos a partir de algunos datos reveladores de los que han sido estos cincuenta años a la sombra de la violencia de ETA y, de ellos, treinta y cinco de democracia pluralista sometidos a la misma presión. ETA se ha erigido en la gran protagonista del terrorismo en España como muestra el gráfico 3 de muertos por acciones violentas o terroristas en España desde 1960, según el cual ETA, además de ser la única organización terrorista que pervive en el tiempo ha causado tres de cada cuatro de las, aproximadamente, 1.200 víctimas mortales de la violencia política que podríamos clasificar como terrorista.

Todo un reguero de sangre y destrucción: 857 asesinados por ETA; miles de familias rotas (3.000 huérfanos, viudas, padres, hermanos, amigos y compañeros); más de 20.000 víctimas directas en atentados (heridos y damnificados) en toda España y no solamente en el País Vasco; 84 secuestrados y miles de extorsionados, muchos de los cuales se han tenido que ir exiliados fuera del País Vasco; 40.000 amenazados y perseguidos según los cálculos de Gesto por la Paz, buena parte de ellos (unos 3.000) con escolta pero la inmensa mayoría sin protección específica; más de 11.000 actos violentos; hasta un 50% de ciudadanos vascos afectados por el miedo y sus indudables secuelas vitales, en algunos momentos.

Del gráfico también se deducen indicios sobre los cambios estratégicos de los terroristas de ETA. Se puede comprobar, fácilmente, que ETA no mata más en el franquismo o contra el franquismo; cuando más mata y contra quien más mata es contra la democracia, y sobre todo en los momentos clave de la institucionalización del nuevo sistema democrático en España. En

AÑOS	ACCIONES VIOLENTAS (*)	SECUESTROS	MUERTOS POR ETA	MUERTOS POR EXT. DCHA	MUERTOS POR GAL	MUERTOS POR OTROS	HUELGAS CONVOCADAS
1978	178	4	65	8	--	13	1
1979	234	13	78	22	--	11	2
1980	192	10	96	29	--	2	--
1981	147	6	30	4	--	4	2
1982	103	6	40	1	--	12	--
1983	119	6	40	--	2	8	--
1984	325	--	33	--	9	--	4
1985	307	3	37	--	11	1	2
1986	315	2	40	--	2	18**	--
1987	133	1	50	--	1	8	--
1988	290	1	19	--	--	--	--
1989	437	1	19	1	--	5	1
1990	294	--	25	--	--	5	--
1991	307	--	45	--	--	10	--
1992	612	--	27 (1)	--	--	--	1
1993	486	1	16 (2)	--	--	--	1
1994	336	--	15 (3)	--	--	--	--
1995	981	1	15	--	--	--	--
1996	1.190	2 -1-	5	--	--	--	--
1997	1.038	--2-	13 (2)	--	--	--	1
1998	519	--	7 (1)	--	--	--	--
1999	344	--	--	--	--	--	--
2000	751	--	27 (4)	--	--	2	--
2001	612	--	16 (1)	--	--	--	--
2002	487	--	7 (2)	--	--	--	2
2003	135	-- [10]	3 (1)	--	--	--	--
2004	159	--	--	--	--	200 (7)**	--
2005	243	--	--	--	--	--	--
2006	315	--	2	--	--	--	--
2007	449***	--	2	--	--	--	--
2008	255***	--	4	--	--	--	--
2009	145***	--	3	--	--	--	1
2010	74***	--	0	--	--	--	1
TOTAL	12.052	57 [10]	779 (17)	65	25	297	18

(*) Incluye: Bombas, sabotajes, robos, acciones de los comités de apoyo y otros actos violentos, sean de ETA o del MLNV.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de Miguel CASTELLS (1982: 38ss), Andrés CASINELLO (1984: 265-308), Gestoras Pro-Amnistía, José L. PINUEL (1986), Anuarios de EGIN (1977-1990), Ministerio del Interior y Vasco Press.

[x] Estimación del número de "secuestros rápidos" de empresarios en el año 2003.

(x) Terroristas muertos en acciones terroristas o policiales.

** Muertos en los atentados islamistas del Restaurante el Descanso, del 11-M y Leganés.

*** 2007: ETA=19, Entorno= 430; 2008: ETA=38, Entorno= 217; 2009: ETA=15, Entorno=130. 2010: ETA=0, Entorno=74

esos años ETA, junto con el terrorismo izquierdista de los GRAPO y de los grupos de extrema derecha, ha producido una media de casi cien asesinados por año en esos momentos clave. Sin embargo, ETA pisará su acelerador mortífero en otros momentos significativos: cuando van a negociar con el gobierno de Felipe González en Argel en el año 1988, con ocasión de los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Expo de Sevilla en el año 1992, tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno de Aznar en el año 1999 y ya con mucha menos fuerza tras el nuevo fracaso negociador con el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2006.

Las primeras elecciones democráticas de 1977, además de aflorar el pluralismo político y las libertades democráticas en España, se producen después de una amplia amnistía que no deja en las cárceles españolas a ningún preso de conciencia ni por delitos de terrorismo. Esto, sin embargo, no fue suficiente para la mayor parte de los grupos dispuestos a continuar con su estrategia violenta antisistema. Como muestra la tabla 1 de acciones violentas y víctimas por terrorismo en España desde 1978, el protagonismo de ETA, la persistencia y la diversificación de sus acciones son evidentes frente al carácter discontinuo o el agotamiento de sus competidores violentos.

Fijándonos en la evolución del terrorismo de ETA, podemos definir las etapas de la violencia o la forma en que han actuado los terroristas para lograr sus fines, tomando como referencia inexcusable las víctimas en cuanto objetivos que nos pueden revelar el mensaje táctico o el sentido estratégico de las acciones terroristas. ¿Qué tipo de víctimas selecciona, o produce, ETA en los distintos momentos? Entre 1960 y 1975, la apariencia era que luchaban contra el franquismo al atacar casi exclusivamente contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas o empresarios y políticos ligados a la Dictadura, pero esto era solo apariencia; en realidad estaban labrándose su aureola de, por un lado, “nacionalistas consecuentes” frente a lo que ellos consideraban una traición ideológica y estratégica del PNV y, por otro, “luchadores por la libertad” entre los sectores democráticos de una sociedad sometida por la Dictadura (los momentos clave son el asesinato del Presidente del Gobierno, Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973 mediante un coche bomba y las movilizaciones en torno a los Juicios de Burgos). Entre 1975 y 1980 luchaban contra la reforma y contra la institucionalización del nuevo sistema democrático y autonómico, tratando de impedir por todos los medios su consolidación y legitimación, ampliando sus víctimas a políticos e instituciones del nuevo gobierno democrático o a miembros de lo que ellos consideraban representativos de la oligarquía vasca. Entre 1980 y 1987, además de consumarse su división interna y el abandono de las armas de la llamada rama político-militar, lo hacían directamente contra el autogobierno, empezando a asesinar miembros de la nueva Policía Autónoma Vasca (Ertzantza) e incluso a víctimas relacionadas con el PNV, además de políticos de los partidos democráticos, empezando con los grandes atentados indiscriminados mediante coche bomba. Entre 1987 y 1995, ante la respuesta unitaria de todos los partidos democráticos tras los primeros pactos antiterroristas de 1988 y el fracaso de las conversaciones de Argel de 1989, su lucha es contra la democracia directamente, tal como lo explicitan en su llamada *alternativa*

democrática, ampliando los objetivos de sus atentados. Y a partir del año 1995, con su estrategia de *socialización del sufrimiento* y la activación de la violencia callejera difusa (o *kale borroka*), actúa directamente contra la sociedad vasca, cuya pluralidad no les gusta porque no consiguen que se doblegue a sus dictados, centrandos sus ataques preferentes en la clase política, especialmente, contra miembros e intereses del PSOE y el PP, cuyas relaciones habían entrado en crisis tras la ruptura de los pactos antiterroristas. Esto no ha impedido que hayan intentado, de nuevo, dialogar, primero, con el PNV, más tarde con el gobierno del PP, tras la tregua de 1998, y finalmente con el nuevo gobierno del PSOE, tras una nueva tregua en el año 2004. En definitiva, una mezcla estratégica de lucha antisistema revolucionaria, de competición por la hegemonía en el seno de su *comunidad étnica* y de limpieza étnico/ideológica en la sociedad vasca.

En estas últimas etapas se produce un fenómeno de especial relevancia para la evolución de la opinión pública, vinculado a su debilidad estratégica y operativa como consecuencia, primero, de la primera gran captura de su cúpula dirigente en Bidart el 29 de marzo de 1992, y, segundo, por el impacto de las políticas antiterroristas basadas en la movilización unitaria de la sociedad, como consecuencias de los pactos antiterroristas y de la eficacia de la acción policial en Francia y España. Se trata en concreto de que, cuando ETA se ve acorralada operativamente, activa la *kale borroka*, como sucede a partir del año 1995: una forma de terrorismo de sustitución y de reclutamiento de nuevos terroristas, al mismo tiempo que una respuesta desesperada de ETA a su falta de capacidad operativa y de intimidación social. Entonces, busca un mecanismo, por una parte, de reclutamiento y, por otra parte, de intimidación difusa que ellos mismos teorizaron como *socialización del sufrimiento*; es decir, que el miedo llegue a todos los sitios porque sin miedo y sin intimidación la organización terrorista pierde autoridad y capacidad de control e imposición social. De este modo, a la persecución de militantes o cargos del PP y el PSE-EE, los servidores públicos o los empresarios, se unen todos aque-

llos sectores sociales que les han hecho frente públicamente (periodistas, intelectuales, profesores, jueces, sindicalistas o pacifistas, entre otros), con una clara connotación de limpieza étnico-ideológica, ejercida por una violencia claramente, asimétrica.

3. Violencia y política en el País Vasco

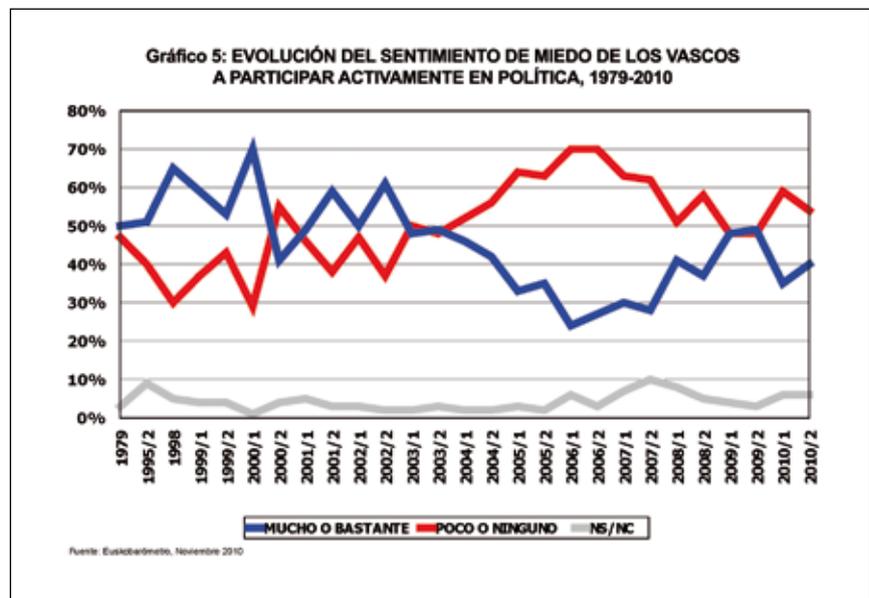
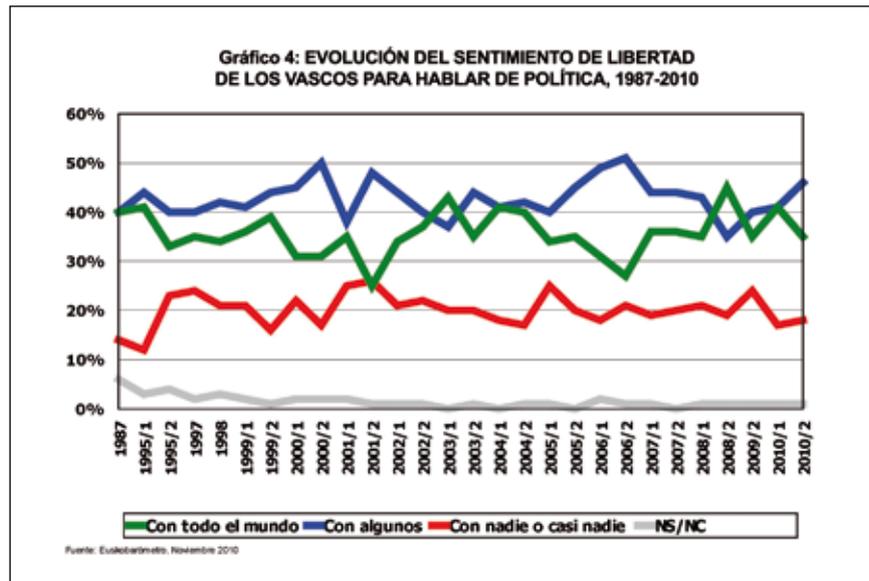
Esta persistencia del terrorismo de ETA y su evolución estratégica no se explican si no es por el concurso de su inspiración ideológica nacionalista, basada en el exclusivismo y la limpieza étnico-ideológica, y la creación de un amplio movimiento sociopolítico, que le sirve de soporte y reclutamiento al tiempo que articula el núcleo orgánico de su comunidad étnica imaginada. La violencia terrorista de ETA es, por tanto, una herencia ideológica de la lectura más radical de Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco, que ha utilizado la guerra civil y el franquismo como coartada pero ha encontrado su principal caldo de cultivo en el establecimiento de las libertades democráticas y luchando contra el pluralismo democrático. Obviamente, ha dramatizado el franquismo y ha convertido la acción policial y judicial en su contra como un elemento de movilización y supervivencia, utilizando a los encarcelados y condenados por delitos de terrorismo como auténticos rehenes y banderín de enganche para un amplio sector de la opinión pública vasca.

Por otro lado, actúa en campaña, en combinación con las organizaciones de su amplio movimiento sociopolítico, en una auténtica división del trabajo que dirige estratégicamente, la propia organización terrorista, en cuanto *ejército secreto*, y que es el auténtico protagonista de la movilización. Así, pues, su acción preferente va dirigida a actuar de forma permanente y propagandística ante la opinión pública, aprovechándose de las libertades que, por otro lado, busca ahogar. Pero, su objetivo principal es provocar la desestabilización de las instituciones e impedir la legitimación del sistema democrático en el País Vasco mediante el enfrentamiento comunitario, abriendo una brecha entre instituciones y opinión pública que haga factible su hegemonía

comunitaria e imprescindible su concurso o su protagonismo para superar la situación de violencia.

De este modo, medio siglo de acción violenta continuada y cotidiana sobre un espacio social pequeño y un territorio de poco más de dos millones de habitantes, generan una subcultura de la violencia, fundamental para la reproducción de su control social, de sus apoyos y su eficacia estratégica. El terrorismo, sea cual sea su matriz ideológica o política, genera una subcultura de la violencia que le suministra motivaciones y discurso, le permite estructurar sus redes sociales de cooptación y apoyo y, mediante la inoculación del miedo en la sociedad, impacta sobre la moral del tejido social, las élites políticas y sociales, los medios de comunicación y las propias instituciones. Su gran meta es imponer fácticamente sus objetivos políticos, obligando a toda la sociedad y sus instituciones a interiorizar “su guerra” para poder resolverla, si no por la derrota de éstas, al menos por el armisticio y el desistimiento de la opinión pública. En el caso del terrorismo nacionalista, como el que nos ocupa, es imprescindible la creación, segregación y enfrentamiento comunitario a base de una continua y penetrante dialéctica de la confrontación nosotros-ellos, amigos-enemigos, patriotas-extranjeros, buenos-malos, que la propia acción violenta visualiza cotidianamente en las víctimas que selecciona o produce. Es esta dialéctica de enfrentamiento comunitario la que requiere y genera una subcultura comunitarista de la violencia, que victimiza doblemente a las víctimas directas de la acción terrorista (al daño físico, se le añade el estigma político-ideológico), pero que, a la larga, extiende la victimización a toda la sociedad, convertida en rehén.

En nuestros estudios muestrales¹ hemos podido comprobar el aislamiento comunicativo de una parte de la sociedad vasca como indicador de esta victimización difusa. En el gráfico 4 mostramos la



evolución del sentimiento de libertad para hablar de política en el País Vasco². Las oscilaciones tienen mucho que ver con la mayor o menor presencia de la amenaza violenta en sus distintas formas. Si tomamos como referencia el grupo de los que no pueden hablar de política con nadie o casi nadie y estudiamos su perfil político, hemos podido comprobar su claro sesgo autonomista. Por el contrario, los que se han sentido o se sienten libres

para hablar de política con cualquiera destacan entre quienes se definen como nacionalistas vascos y son votantes los partidos de ese espectro ideológico.

Un segundo indicador que venimos aplicando sistemáticamente en nuestro barómetro desde 1995³ se refiere a la percepción ciudadana de la existencia de miedo a participar en política, obteniéndose la serie del gráfico 5, que muestra la evolución del mismo desde 1979 y oscilando entre el mínimo durante la última tregua de ETA en 2006 y el máximo después de la ruptura de la tregua de 1998, para situarse en este momento en torno al 50%, como 30 años atrás. De nuevo, si nos referimos a la última oleada, son los votantes del PP y PSE-EE los que más

¹ Nos referimos a las encuestas periódicas del Equipo Euskobarometro del departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, cuyas series y datos están disponibles en www.ehu.es/euskobarometro.

² Este indicador lo hemos introducido en nuestras encuestas en 1987 y desde 1995 lo incluimos en todas las oleadas semestrales del nuestro barómetro.

³ Este indicador lo habían aplicado por primera vez en 1979 Juan J. Linz y su equipo (1986).

perciben ese temor, frente al resto de electorados nacionalistas.

Una de las consecuencias del miedo generado por la extorsión económica sobre empresarios y profesionales o las amenazas sobre los sectores políticos no nacionalistas ha sido la marcha del País Vasco de miles de ciudadanos y familias, buscando más tranquilidad, ya sea para intentar ponerse a salvo, ya sea para evitar la tensión cotidiana, en un claro efecto de limpieza étnico-ideológica.

Estos efectos son fácilmente entendibles a la vista de la presencia cotidiana de la intimidación violenta, ya sea de los terroristas, ya sea del control social ejercido por las redes de apoyo de su amplio movimiento social, especialmente, en determinadas zonas del territorio donde su presencia, incluso institucional, y densidad movilizadora es más intensa. Consecuentemente, otro de los efectos políticos de esta presencia cotidiana de la violencia se refiere a las limitaciones competitivas de los partidos no nacionalistas (PP y PSE-EE) en amplias zonas del territorio, donde son atacados, amenazados y perseguidos, con dificultades para mantener abiertas sus sedes, relacionarse con sus simpatizantes y electores o presentar candidatos en las instituciones locales. Finalmente, la presencia institucional de las organizaciones políticas que apoyan al terrorismo (en el Parlamento Vasco, las tres instituciones forales provinciales o los ayuntamientos), además de la notoriedad y la financiación pública que les reporta, les ha permitido ejercer una clara acción antisistema con una fuerte capacidad de chantaje en la formación de mayorías parlamentarias, lo que ha venido condicionando la gobernabilidad de las instituciones regionales, al tiempo que ha polarizado, seriamente, la vida política vasca.

4. Respuesta de las instituciones y de la sociedad

¿Cuál ha sido la respuesta social e institucional a tales embates y desafíos, sobre todo del terrorismo nacionalista? También en esto podemos distinguir varias etapas:

- La primera, que cubre dos décadas de terrorismo y movilización antifranquista antes de la amnistía de 1977, es la de la emergencia de la *vanguardia* terrorista y

su instrumentalización antifranquista por los sectores democráticos movilizados contra la Dictadura, sobre todo, en la sociedad vasca. Es la época en la que los terroristas ponen en marcha la estrategia *acción-represión-acción*, de largo alcance y con muy buenos resultados para ellos. Los momentos clave fueron los juicios de Burgos en 1970 y el asesinato del Presidente del Gobierno Carrero Blanco en 1973. El día que muchos demócratas aplaudieron aquel asesinato no sabían que se podrían estar cavando su propia tumba para muchos años al convertir a ETA en la vanguardia de la lucha por la democracia. Nada más alejado de la realidad, porque a los terroristas, como se ha demostrado con posterioridad, no les interesaba ni la democracia, ni las libertades. Se les estaba haciendo un favor enorme convirtiéndoles en poder fáctico para muchos años, regalándoles la adhesión y el apoyo de una buena parte de la población, vasca o no, y una aureola internacional y romántica de *Freedom Fighters*.

- La segunda etapa transcurre entre 1977 y la alternancia socialista de 1982, jalonada por el inicio de la transición democrática, la puesta en marcha del autogobierno vasco encabezado por el PNV, la disolución negociada de ETApM y el intento de golpe de Estado del 23-F. Se trata de una etapa muy inercial, en la que la clase política se concentraba en diseñar y apuntalar el nuevo sistema democrático, al tiempo que la ciudadanía trataba de salir de la gran crisis económica que se arrastraba en España desde el principio de los años 70. A pesar de ser los años más duros del azote terrorista de ETA, ésta tiene muy poca respuesta social y política. La sociedad y buena parte de la clase política, o la consideraban una herencia del franquismo, que habría de ir declinando con la democracia, o se quedaban paralizados por una suerte de inhibición culpabilizadora a partir de una cierta solidaridad antirrepresiva. Era como si la sociedad en su conjunto tuviera que pagar alguna factura pendiente, endosándosela, precisamente, a los terroristas. Muchos habían interiorizado que el terrorismo era una especie de culpa colectiva de la dictadura, cuando tenía muy poco que ver con ella. Eso sí, la guerra

civil y la dictadura les había servido de coartada ideológica y de banderín de enganche movilizador. La respuesta institucional, a raíz de la disolución de ETApM y la integración en el sistema de su fuerza política (*Euskadiko Ezkerra*) fue la política de reinserción social para los terroristas arrepentidos.

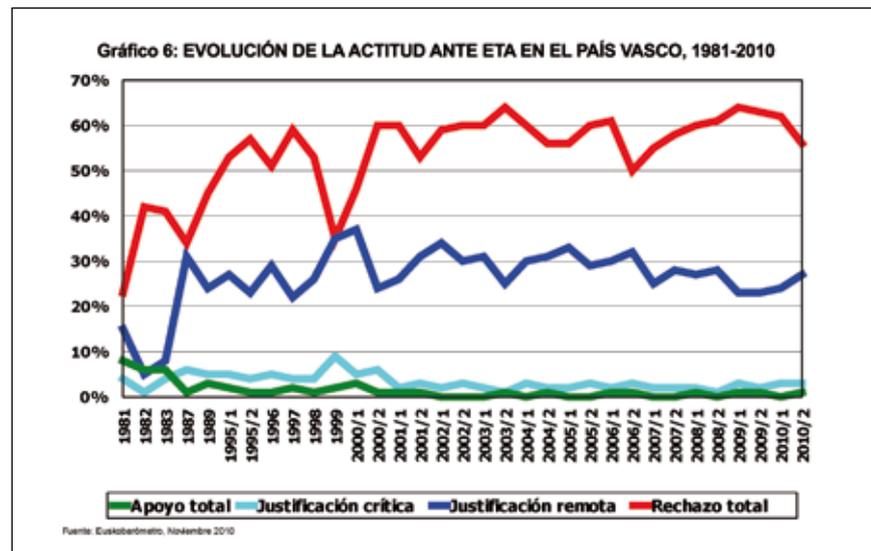
- La tercera etapa transita entre 1982 y 1987, caracterizada por la alternancia socialista, la consolidación democrática, la recuperación económica, el ingreso de España en la CEE y la modernización general del país, así como la puesta en marcha del autogobierno en el País Vasco bajo la hegemonía y ruptura del PNV. Es el periodo de la guerra sucia contra ETA de los llamados GAL. Se trata de una etapa en la que la sociedad ve en el PNV un *seguro de vida*, y al que el gobierno socialista atribuye el papel clave e imprescindible para el final del terrorismo pero sin contrapartida alguna, siguiendo con la inercia de los distintos gobiernos de la UCD. Es el momento en que el absentismo institucional de los nacionalistas violentos le permite al nacionalismo institucional, aprovechando su posición central, diseñar y construir su hegemonía, en una suerte de coalición en la sombra y de división del trabajo en el seno de la comunidad nacionalista. Una pieza clave de esta nueva estrategia es la creación y despliegue de la nueva Policía Autonómica Vasca, con vocación de sustitución futura de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco.

- Entre 1987 y 1996, la cuarta etapa, se caracteriza por los gobiernos de coalición entre el PNV y el PSE-EE en el País Vasco y finaliza con la alternancia del PP en España. En esta etapa se produce el primer intento negociador con ETAm en Argel en 1989, que resulta fallido y abre un nuevo tiempo para la política antiterrorista con la colaboración de las autoridades francesas. Lo más importante es el giro que se da hacia la unidad de los demócratas y el comienzo de la movilización social contra el terrorismo, gracias a los acuerdos de AjuriaEñera, Madrid y Pamplona. Es, sin duda, uno de los mejores periodos, si no el mejor, en la lucha contra el terrorismo y su asfixia social, reforzando

también la colaboración francesa para acabar con el llamado *santuario* francés.

- La quinta etapa, es la que va de 1997 a 2004, liderada por los gobiernos de José M^a Aznar. Fracasado el Pacto de AjuriaEnea y el resto de pactos unitarios y plurales, PSOE y PP sellan el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, que ha dado excelentes frutos en la lucha contra el terrorismo y la movilización de la sociedad civil. Es el tiempo (1998) en el que en el País Vasco se firma el Pacto de Lizarra o Estella entre el PNV y ETA, con el resto de partidos nacionalistas e IU, abriéndose la política de frentes entre nacionalistas y autonomistas. Es también el de la tregua de ETA en 1999 y el segundo fracaso negociador entre ETA y el gobierno, en este caso del PP, en Suiza. Esto da lugar a una fase de tolerancia cero contra el entorno social y político de ETA, con la nueva Ley de Partidos (2002), las ilegalizaciones consiguientes, la asfixia internacional por los acuerdos y listas de organizaciones terroristas tras el 11-S americano. Además, el gobierno del PP da un giro radical en la percepción del papel del PNV en la lucha contra el terrorismo, considerándolo más como un obstáculo que como un aliado, y llegando a plantear una coalición política PP-PSE/EE (2001) para sustituir a la mayoría nacionalistas en las instituciones vascas.

Y, sobre todo, es el período en el que emergen, por primera vez, las víctimas y la movilización de la sociedad civil, de forma autónoma. A estas alturas, ya se contaban por miles las víctimas, absolutamente desconocidas, ocultas y hasta perseguidas (era la época del “algo habrá hecho”, que tranquilizaba a las malas conciencias). Es sintomático que hasta el año 1997 no se escribe casi ni una línea sobre las víctimas del terrorismo en España. No deja de ser dramático e inhumano tal olvido. Imaginémonos el sufrimiento de toda esa población afectada y la insensibilidad humana y moral del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, en la negociación de ETAp con el gobierno de la UCD para su disolución en 1981 se habló de la excarcelación y la reinserción de los terroristas, pero las víctimas fueron las grandes ausentes y nadie dijo nada entonces. Ni se les pidió perdón, ni se aclararon los casos sin resolver.



El asesinato de Miguel Angel Blanco en Ermua en 1997 marca un antes y un después en el protagonismo de las víctimas y en la movilización cívica, sobre todo, la no nacionalista. Ya había habido precedentes, como *Gesto por la Paz* o Covite liderado por Cristina Cuesta y la activación de la movilización social tras el asesinato de Gregorio Ordóñez.

- La última etapa se inicia a partir de 2004, tras la ruptura total entre los dos grandes partidos nacionales, como consecuencia del dramático final de la legislatura con el atentado yihadista de Madrid a tres días de las elecciones legislativas y el vuelco electoral a favor del PSOE. Con la nueva tregua de ETA y el proceso de negociación de ésta con el gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero, apoyado por todos los partidos menos el PP, se abre un período de división y desmovilización de la sociedad civil durante toda la legislatura. Con todo, las víctimas no pierden su protagonismo moral y movilizador pero aparecerán sin autonomía propia e instrumentalizadas por los intereses de la confrontación partidista. De esta frustración y desmovilización cívica surgirá, precisamente, el nuevo partido liderado por Rosa Díez y Fernando Savater (UPyD), heredero del movimiento Basta Ya. Sin embargo, el nuevo fracaso negociador tras el coche bomba de la T4 en Madrid forzó un giro en la política antiterrorista del gobierno socialista y la vuelta, en la nueva legislatura de 2008, a la política de unidad democrática y de exclusión elec-

toral e institucional de los representantes políticos de los terroristas, con importantes éxitos policiales. Al mismo tiempo, se produce otro hecho insólito en el País Vasco, con la alternancia en el gobierno autonómico, encabezado desde 2009 por el PSE-EE con el apoyo del PP en una suerte de reedición invertida de la coalición fallida en 2001.

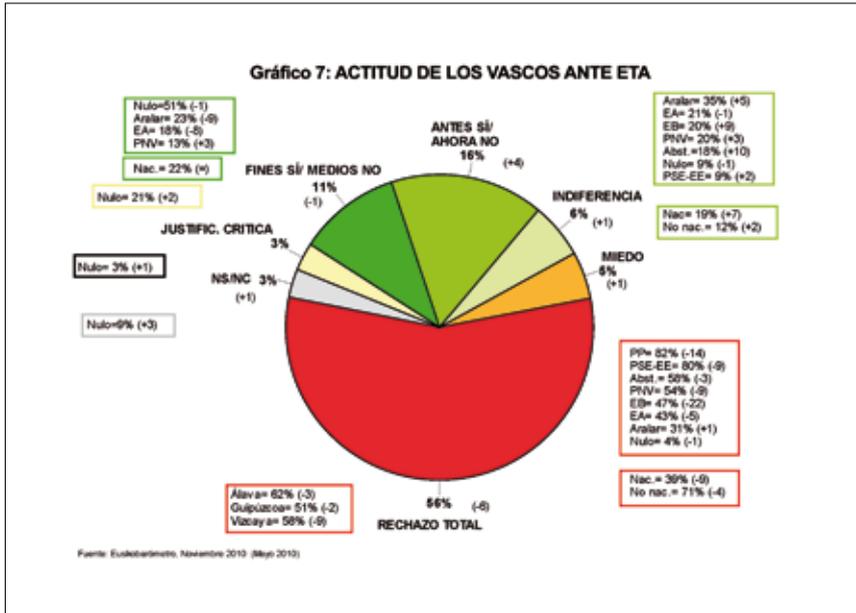
5. La evolución de la opinión pública

Contextualizado el clima de violencia, sus impactos y las respuestas institucionales y sociales a su acción durante los últimos cincuenta años, nos detendremos en el estudio de las reacciones de las opiniones públicas vasca y española ante la misma, sus diferencias, así como su evolución en estos últimos años.

5.1 La opinión pública vasca ante ETA y la violencia

Durante todos estos años, ¿qué pensaba o cuál era la actitud de la sociedad vasca ante ETA?

- Nosotros hemos empezado a hacer esta pregunta y a testarla de manera continuada desde el año 1981. El resultado lo tenemos en el gráfico 6. Como se puede comprobar, el rechazo no llega a ser mayoritario hasta la década de los 90. Hasta ese momento predominaban, si no el apoyo explícito, algún tipo de justificación o la simple inhibición. Llama la atención el descenso del rechazo y, el consiguiente, aumento de apoyos y justifica-



ciones en los momentos de tregua y negociación, especialmente, durante la tregua y negociación en la etapa del pacto de Lizarra. El fracaso de ésta última, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, las nuevas políticas antiterroristas y la movilización cívica en torno a las víctimas parece que han hecho reaccionar, definitivamente, a la sociedad vasca con un rechazo mayoritario y sostenido, a la vez que cae hasta sus mínimos el apoyo explícito. Incluso en la última tregua de 2004, que acompañó al proceso de conversaciones entre el gobierno y ETA, la reacción de la sociedad ha sido totalmente distinta, perdiendo ETA la partida de la propaganda, claramente, incluso entre sus propios apoyos. Prueba de ello es que, en los procesos electorales de la última década, sus marcas políticas y sus propuestas no han hecho más que perder apoyos, reduciendo su electorado en un 50% del que partieron en el inicio del proceso de Lizarra en 1998.

Esto último lo podemos visualizar en su fase actual en el gráfico 7. Esta tarta describe perfectamente ese círculo que ha ido rotando en las tres últimas décadas. Como se puede comprobar, el rechazo mayoritario, en nuestra oleada de noviembre de 2010, aglutina a tres de cada cuatro no nacionalistas y es ligeramente mayoritario entre los nacionalistas. La justificación remota de los que dicen que antes pudo tener sentido, pero ahora ya no o los que comparten sus fines pero no

sus medios encuentran eco todavía, sobre todo, entre los nacionalistas menos moderados (42%), pero también en sectores residuales de la izquierda. El propio electorado que ha apoyado tradicionalmente a ETA en sus diversas marcas ha empezado a resquebrajarse en estos últimos años, especialmente tras el último fracaso negociador y las sucesivas ilegalizaciones. Incluso entre éstos, son hoy menos los que expresan su apoyo incondicional (3%) frente a los que muestran su rechazo frontal (4%).

Los electorados autonomistas mantienen, de forma casi continuada, un nivel de rechazo en torno al 70% (el del PP con un promedio del 90% y el del PSE-EE del 80%) y alrededor

del 20% las justificaciones remotas. Por su parte, entre los nacionalistas, tanto el rechazo como las justificaciones remotas han ido a la par hasta su decantación por el rechazo (54%) en el último año. Esto ha sido posible, no solo por una clara decantación por el rechazo del electorado del PNV, sino y sobre todo por la evolución y fragmentación interna de los apoyos electorales a las marcas cercanas al terrorismo, tal como se puede comprobar en el gráfico 8.

De este gráfico se deduce cómo el apoyo incondicional (20%) o crítico (40%) de la segunda mitad de los años noventa cae hasta niveles mínimos una década después, iniciando el camino de las justificaciones remotas que los electorados de izquierda, primero, y nacionalistas, después, habían recorrido en los años 80 y 90, respectivamente. Además, queda en evidencia cómo la propia sociología de apoyo al terrorismo acusa en su seno el fracaso de los dos últimos procesos negociadores del 2000 y, sobre todo, del 2006.

- Un segundo indicador que hemos tomado y adaptado de las primeras investigaciones de Juan J. Linz (1986) se refiere a la imagen de los activistas de ETA. Si nos fijamos en la evolución de los calificativos que obtienen los activistas de ETA en la opinión pública vasca desde el inicio de nuestra democracia, tal como se muestra en el gráfico 9, observamos algo parecido.

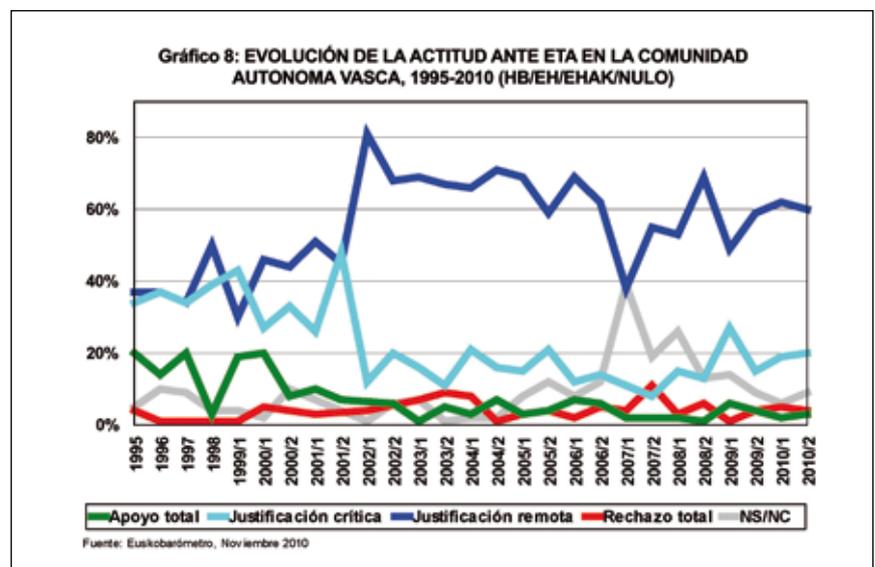
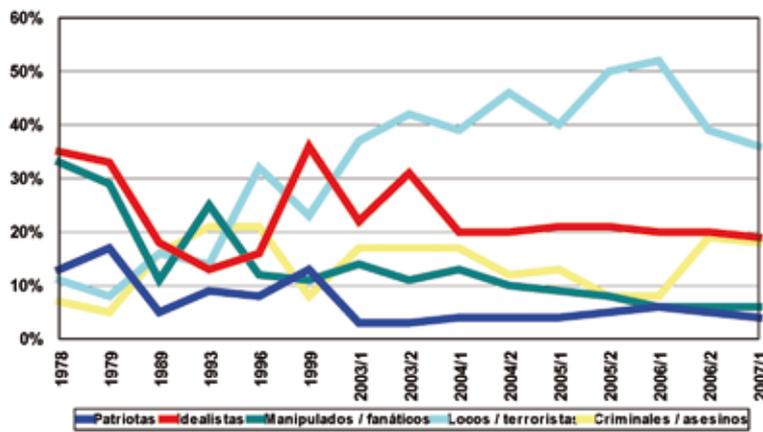
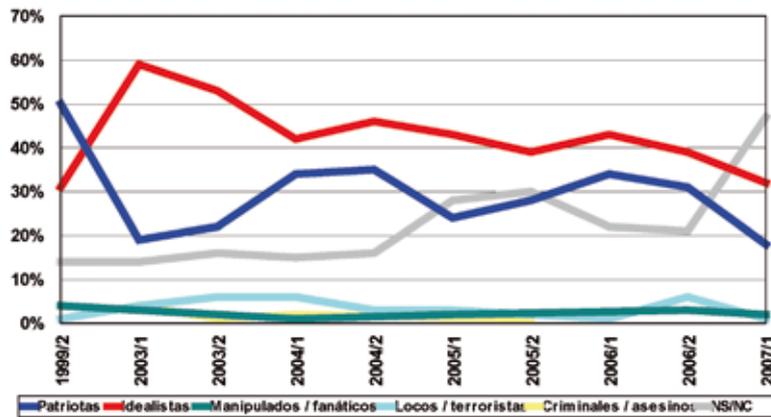


Gráfico 9: EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN DE LOS ACTIVISTAS DE ETA EN EUSKADI, 1978-2007



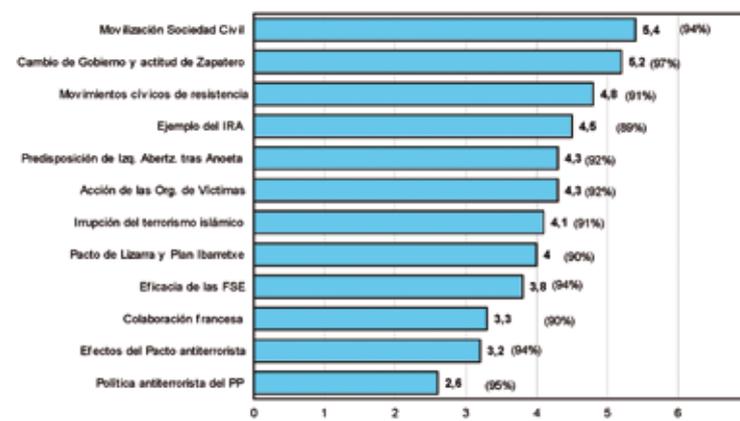
Fuente: Euskobarómetro, Mayo 2007

Gráfico 10: EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN DE LOS ACTIVISTAS DE ETA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, 1996-2007 (HB/EH/EHAK)



Fuente: Euskobarómetro, Mayo 2007

Gráfico 11: VALORACIÓN DE DIFERENTES PROTAGONISTAS EN LLEGADA DE DINÁMICA DE FINAL DE TERRORISMO



Fuente: Euskobarómetro, Noviembre 2006

De nuevo, hasta el final de los 80 y el fracaso de las conversaciones de Argel predominan los calificativos exculpatorios o contemporizadores (patriotas, idealistas

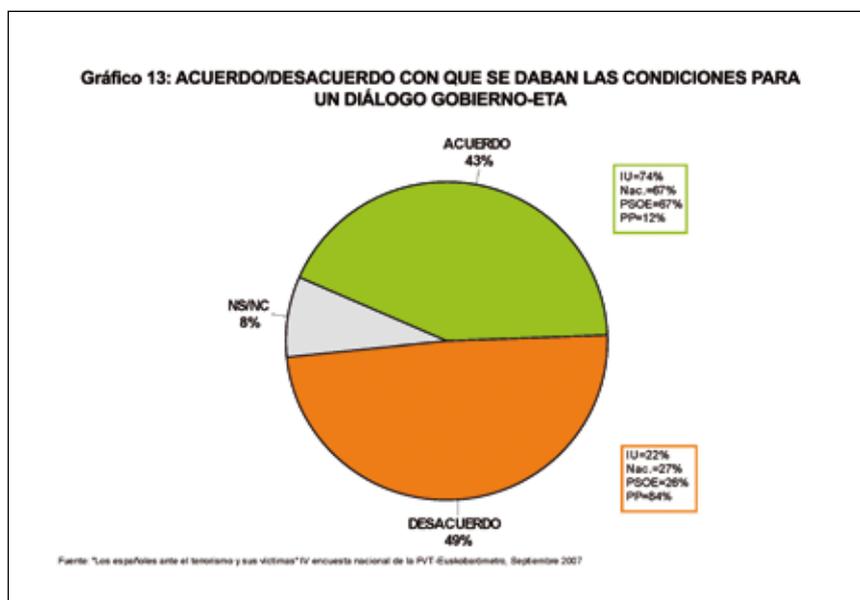
o manipulados/fanáticos) y no es hasta el fracaso del proceso negociador del año 99 cuando la reacción de la sociedad vasca es claramente negativa (terroristas y ase-

sinos). Las oleadas y los ritmos sociales de incorporación al rechazo definen una suerte de círculos concéntricos, de forma que los más retardatarios en ir incorporándose a esa dinámica de largo alcance han sido, primero, los electorados de la izquierda socialdemócrata, más tarde, los sectores más moderados del nacionalismo, seguidos de la izquierda y el nacionalismo más radical, hasta empezar a afectar a los propios núcleos de apoyo más urbano de ETA.

- Un tercer indicador que venimos utilizando desde 1989 y que contrasta con los anteriores es la pregunta sobre el grado de acuerdo o desacuerdo con quienes dicen que hoy en el País Vasco se pueden defender todas las ideas sin necesidad de recurrir a la violencia. El contraste estriba en que el acuerdo es muy constante y mayoritario (alrededor del 80%) frente a un rechazo muy minoritario (en torno al 15%), con pequeñas oscilaciones, lo que nos hace pensar en algún componente exculpatorio y/o justificativo del terrorismo de ETA en sectores sociales, ideológicos y de opinión cuando se aplican los indicadores anteriores. Este último indicador respondería a lo que podríamos llamar “políticamente correcto”, mientras que los anteriores tendrían más que ver con el impacto del propio terrorismo, su componente identitario y los efectos socializadores y de control social de la subcultura de la violencia. Con todo, en este caso lo más significativo es la evolución de las actitudes de los propios apoyos electorales del terrorismo, tal como se muestra en el gráfico 10, en el que se detecta, claramente, la inestabilidad actitudinal de los mismos, especialmente afectados por los fracasos de los dos últimos procesos negociadores.

5.2 Las sociedades vasca y española ante el final del terrorismo de ETA y las políticas antiterroristas

El año 2006, en un contexto mediático de relativo optimismo sobre las posibilidades reales de un final del terrorismo, le pedíamos a la ciudadanía vasca que nos valorase la contribución de distintos protagonistas a ese posible final, obteniéndose el ranking que mostramos en el gráfico 11. Siguiendo un patrón de gran contras-



te de opiniones entre nacionalistas y no nacionalistas, lo primero que destaca es el papel relativamente, relevante que la sociedad vasca le atribuye a la movilización social para la derrota del terrorismo, seguida del cambio de gobierno y su estrategia antiterrorista basada en el diálogo y del papel dinamizador de los movimientos cívicos de resistencia que proliferan sobre todo a partir de la segunda mitad de los noventa. A partir de ahí se desgranar otra serie de razones en la que se detecta el peso de la opinión nacionalista (el ejemplo del IRA, la predisposición del propio movimiento de apoyo a ETA o el pacto de Lizarra y el plan Ibarretxe) o no nacionalista (la acción de las organizaciones de víctimas, la irrupción del terrorismo islámico, la eficacia poli-

cial, la colaboración francesa, el pacto antiterrorista o la política antiterrorista del gobierno del PP).

Sin embargo, el contraste entre las opiniones públicas nacionalista o no nacionalista en el seno del País Vasco es más relevante, si cabe, cuando observamos en el gráfico 12 la valoración anterior con la que hace el conjunto de la opinión pública española a partir de un indicador similar en ese mismo año⁴. En un contexto de menor diversidad de opiniones y mayor intensidad en las puntuaciones positivas, la opinión pública española

pone por delante la eficacia policial y la colaboración francesa, a las que sigue la movilización (de la sociedad civil, de los movimientos de resistencia y de las organizaciones de víctimas), seguidos del ejemplo norirlandés, los efectos del pacto antiterrorista o las políticas antiterroristas de los sucesivos gobiernos, para cerrar el ranking la irrupción del terrorismo islámico en la escena política.

En este mismo sentido y un año después⁵, tras haberse confirmado la ruptura unilateral por parte de ETA del proceso de diálogo con el gobierno de José L. Rodríguez Zapatero, que tanta división había generado en la sociedad española, le preguntamos a nuestra opinión pública por su grado de acuerdo o desacuerdo con que se diesen las condiciones para tal diálogo gobierno-ETA, obteniéndose el resultado que se muestra en el gráfico 13. Como se ve, la división era profunda entre los que estaban de acuerdo y en desacuerdo, los primeros entre los electorados de IU, PSOE y nacionalistas y los segundos entre los votantes del PP, pero unos y otros mostraban desalineamientos en sus electorados respectivos, aunque con un saldo favorable para los socialistas.

En esa misma fecha el 70% de los españoles creía que el Gobierno o sus emisarios habían estado negociando en secreto con ETA algún tipo de condiciones políticas para que el llamado "proceso de paz" avanzase, aunque finalmente no llegasen a ningún acuerdo; y el 66% pensaba que no había habido suficiente transparencia a la hora de explicar a la sociedad lo fundamental de dicho proceso. Con todo, el 53% (frente al 41%) aprobaba la gestión del Presidente del Gobierno en el intento de poner un fin dialogado al terrorismo de ETA.

Si en diciembre de 2006, en pleno proceso de diálogo, la mayoría de los españoles se mostraban entre escépticos (51%) y optimistas (41%) sobre el final del terrorismo de ETA, un año después

⁴ En nuestra III Encuesta nacional sobre "Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas" de diciembre de 2006 (www.ehu.es/euskobarometro)

⁵ En nuestra IV Encuesta nacional sobre "Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas" de septiembre de 2007 (www.ehu.es/euskobarometro).

una gran mayoría (62%) de españoles eran pesimistas sobre dicho final, a pesar de reconocer el debilitamiento progresivo de ETA (61%). Tal pesimismo estaba basado en la constatación por la inmensa mayoría de la opinión pública española de la nula voluntad de ETA para poner fin a la violencia (88%) y de la izquierda abertzale que le apoya para aceptar las reglas de juego democráticas (90%).

Vascos y españoles, sin embargo, vuelven a diferenciarse sobre algunas medidas de política antiterrorista.

• En primer lugar y como muestra el siguiente gráfico 14, los españoles se dividían en 2008 entre el rechazo total (46%) a una nueva negociación con ETA o la aceptación condicionada al abandono previo de las armas (41%), siendo solo un 12% los que apoyarían

una negociación incondicional; lo que contrasta, significativamente, con lo que piensa en la actualidad la opinión pública vasca (20% , 47% y 29% , respectivamente), mucho más proclive al final dialogado, aunque sea condicionado.

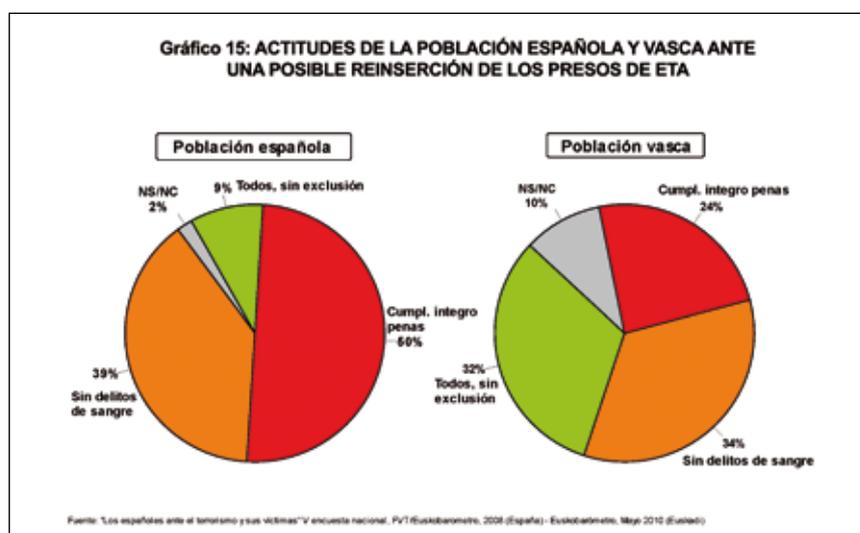
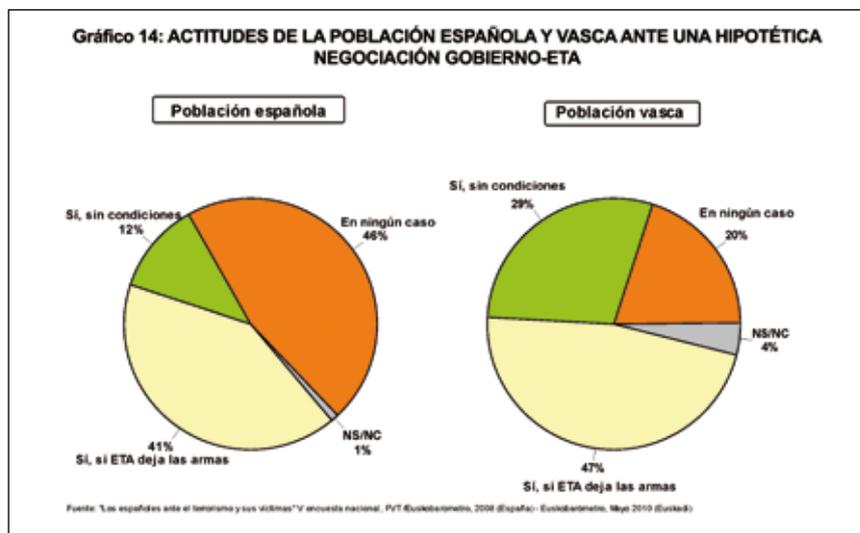
• En segundo lugar, sobre la política penitenciaria de acercamiento selectivo a cárceles del País Vasco o de las provincias vecinas de los presos que se alejan de la disciplina de la organización terrorista mientras que los españoles eran mayoritariamente contrarios (63% frente a 30%) en diciembre de 2008, la opinión pública vasca mostraba su apoyo mayoritario (69% frente a 12%) en noviembre de 2010.

• En tercer lugar, sobre las medidas de ilegalización y exclusión electoral de

las estructuras políticas de apoyo a ETA (ANV, EHAK, EH, Batasuna) en virtud de la Ley de Partidos, de nuevo eran apoyadas mayoritariamente (71% frente a 20%) por la opinión pública española a finales de 2008, mientras que dos años después la sociedad vasca muestra su desacuerdo (37% frente a 29%) con la citada ley y sobre todo sus consecuencias ilegalizadoras.

• En cuarto lugar y ante un eventual final del terrorismo, como muestra el siguiente gráfico 15, la opinión pública española se mostraba en 2008 en contra de medidas de reinserción de los terroristas presos y a favor del cumplimiento íntegro de sus penas (50%), frente a aquellos más indulgentes con todos los presos que se arrepientan (10%) o los que condicionan las medidas de reinserción a solo los que no hayan cometido delitos de sangre (39%), mientras que la sociedad vasca se mostraba mucho más dividida (24% , 32% y 34% , respectivamente) ante esta cuestión en Mayo de 2010. Pero, además, la sociedad española se expresaba de forma casi unánime (85%) ante la demanda de obligar a los terroristas a aclarar la autoría de los casi 300 asesinatos que siguen sin resolverse.

En lo que también era⁶ casi unánime la opinión pública española en 2008 es en el apoyo al acuerdo entre PSOE y PP en materia de política antiterrorista (89%) y la necesidad de revitalizar el pacto por las libertades y contra el terrorismo (88%), reforzando la eficacia y persecución policial y judicial y la tolerancia cero con quienes apoyan o justifican el terrorismo en el País Vasco. Pero, de nuevo, aparece el contraste con la opinión pública vasca a este respecto⁷, si tenemos en cuenta que en noviembre de 2010 ésta se mostraba más dividida entre quienes lo consideran prescindible (32%) o im-



⁶ Nos referimos a los datos de nuestra V Encuesta nacional sobre "Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas" de noviembre de 2008 (www.ehu.es/euskobarometro).

⁷ Nos referimos a las respectivas oleadas del Euskobarómetro (www.ehu.es/euskobarometro).

prescindible (49%), pero demandaban de forma casi unánime (81%) un acuerdo de todos los partidos democráticos vascos para luchar contra el terrorismo.

Conclusiones

Cincuenta años de sufrimientos y exposición a la lluvia permanente de la acción violenta y la intimidación activando el enfrentamiento comunitario por parte del nacionalismo vasco violento (y treinta de ellos de lucha democrática contra el terrorismo, basada en la acción del Estado de derecho, la defensa del pluralismo y la movilización de la sociedad civil) no pueden dejar indiferente a una sociedad que se viene jugando su propia existencia en tal combate. Tras cinco décadas de terrorismo de ETA, primero en dictadura y después en democracia, la sociedad y sobre todo las fuerzas políticas han ido aprendiendo lentamente a reaccionar ante sus efectos y estrategias, encontrando en el consenso de diagnóstico y respuesta el mejor antídoto contra la desmoralización, tan letal para el pulso democrático de nuestra sociedad. Las heridas históricas, la complejidad ideológica y política de nuestro tejido social, la eficacia movilizadora y articuladora de la subcultura de la violencia, la confrontación identitaria, las ambigüedades de la transición democrática y del proceso de autogobierno, los errores y vaivenes de las políticas antiterroristas han podido alargar más de lo debido la vida de la hidra terrorista, pero no han podido impedir que se pueda estar viendo ya la luz al final de este largo y tenebroso túnel.

Todo ello se ha reflejado en el combate por el control de la opinión pública vasca, por un lado, y en las ambigüedades y lenta decantación de ésta en el rechazo, no solo de las acciones, sino también de los argumentos de los terroristas. Ha tenido que ser la reacción en un movimiento de indignación de la sociedad civil la que sacase a la sociedad vasca de la espiral del silencio en la que vivía sumergida, si bien en un contexto de aparente, por asimétrico, enfrentamiento identitario o comunitario.

La opinión pública ha jugado y juega un papel clave en la derrota estratégica y política del terrorismo, primero, y

en la erradicación de la subcultura de la violencia, después. Pero se ha demostrado que necesita el concurso de una acción institucional coherente y de una adecuada movilización social, que haga audible un discurso claro, creíble y aceptado por una ciudadanía que rechaza la división y el enfrentamiento. La estrategia de la confrontación de identidades, si no de comunidades, mantiene una división crónica en el seno de la sociedad vasca entre lo que podríamos llamar dos opiniones públicas: la nacionalista y la no nacionalista. La primera, bien estructurada y consistente en sus discursos y actitudes, mientras que la segunda se muestra más dispersa y permeable. Huelga recordar que el terrorismo de ETA es vasco y nacionalista, aunque no toda la sociedad vasca o todo el nacionalismo pueda ser señalado como responsable del dolor causado por aquel.

Sin embargo, en esta dinámica asimétrica no es indiferente el papel jugado por el control nacionalista de las instituciones durante los últimos treinta años, en especial los medios de comunicación públicos, el complejo cultural y de propaganda y el sistema educativo. Pero, además, esta división de opiniones, al tiempo que objetivo estratégico de los terroristas, es aprovechada por éstos para, por un lado, intentar imponer su hegemonía discursiva en el seno de la comunidad nacionalista y, por otro, avanzar en la limpieza étnico-ideológica de los no nacionalistas.

A pesar del predominio de los argumentos nacionalistas en la sociedad vasca y el mayor impacto sobre su cultura política de los efectos desmoralizadores del terrorismo, la sociedad vasca es suficientemente plural como para huir de cualquier simplificación, que no sea la de que ella misma es la primera víctima inconsciente de esa patología interna, dándose en su seno, tanto actitudes y comportamientos de connivencia, oportunismo o cobardía ante el terrorismo como de coraje y rebelión democráticos. La profunda división social y polarización política en el seno de la sociedad vasca, la intensidad y asimetría del sufrimiento cotidiano, las ambigüedades del nacionalismo institucional y la división entre los grandes partidos

nacionales entre otras circunstancias han hecho muy difícil, tardía y errática la necesaria movilización social y la concertación política para avanzar en el proceso de deslegitimación de la violencia y de asistencia, solidaridad efectiva, verdad, justicia y reparación de las víctimas, como prerequisites imprescindibles para la reconciliación definitiva y la erradicación de la subcultura de la violencia en el seno de la sociedad vasca. La propia ruptura y distanciamiento efectiva entre las opiniones públicas vasca y española son un efecto buscado del terrorismo y sus cómplices o beneficiarios, convirtiéndonos de esta manera, a ciudadanos e instituciones, también en víctimas.

Finalmente, no es casual, ni indiferente, para la evolución integradora y plural de la sociedad vasca el incipiente cambio institucional basado en la alianza de los que podríamos llamar “perdedores”. Nos referimos al actual gobierno autonómico del PSE-EE en minoría, apoyado en su acuerdo con el PP, en el que destaca precisamente su estrategia de erradicación de la subcultura de la violencia, de defensa del pluralismo, de moderación política y de amortiguación del debate o la confrontación identitaria. Hoy podemos afirmar, sin ambages, que las instituciones de nuestra democracia han derrotado a ETA. Solo nos falta saber si Sortu está dispuesta a organizar sus exequias, qué hará con su dramática herencia y si se aplicará en serio a erradicar la subcultura de odio, intolerancia y violencia a cuya siembra se ha dedicado en estos últimos treinta años. Solo así podremos comprobar si de verdad se han convertido a la democracia y al pluralismo, haciéndose acreedores del reconocimiento social e institucional. El camino no será ni corto, ni fácil. ■

Francisco J. Llera Ramo es catedrático de Ciencia Política y Director del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco y autor de *Los vascos y la política*.